

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la República

Folio de la solicitud: 330024624001568

Comisionada Ponente y encargada del engrose: Josefina Román Vergara

VISTO el estado procesal del expediente del recurso de revisión citado al rubro, interpuesto ante este Instituto, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS

1. Solicitud de información. El doce de junio de dos mil veinticuatro, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona presentó la solicitud de acceso a la información pública ante la Fiscalía General de la República, requiriendo lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega:

“Electrónico a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT” (sic)

Descripción de la solicitud de información:

“Responder de forma breve y clara en un mismo oficio evitando señalar instrucciones para redirigir a otras plataformas de respuesta y/o información lo siguiente;

Informar el nombre, nivel del cargo, sueldo, así como la dirección que se encuentran adscritas las siguientes personas que laboran actualmente en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL);

* Verónica Athenea Maldonado Cruz

* Lesly Giovana Moreno Moreno” (sic)

2. Respuesta a la solicitud. El diez de julio de dos mil veinticuatro, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado notificó la respuesta a la solicitud de mérito, en los términos siguientes:

Descripción de la Respuesta:

“Se anexa oficio a través del cual se da respuesta a su solicitud de información. Para abrirlo utilice el programa Adobe Acrobat Reader. En caso de tener algún problema con el archivo adjunto favor de comunicarse al teléfono: 55 5346-0000, ext. 507922 o 501628 o escribirnos al correo electrónico leydetransparencia@fgr.org.mx” (sic)

Archivo adjunto de la respuesta:

“documento_adjunto_respuesta_330024624001568” (sic)

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

El archivo adjunto contiene el oficio FGR/UETAG/003095/2024, del nueve de julio de dos mil veinticuatro, emitido por la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental del sujeto obligado, y dirigido a la persona solicitante, mediante el cual se manifestó lo siguiente:

“Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (**CPEUM**); 1°, 2, 61, 121, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (**LFTAIP**); 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República (**LFGR**); 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20° del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, en relación con su **solicitud de acceso a la información**, dirigida a esta **Fiscalía General de la República (FGR)**, consistente en:

[Se transcribe la solicitud de información en mérito]

Al respecto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la **LFTAIP**, su solicitud fue turnada para su atención a la unidad administrativa competente, la cual manifestó **que se actualiza una imposibilidad jurídica para pronunciarse sobre la existencia o no de la información solicitada**, en virtud de que hacerlo sería proporcional a aseverar la adscripción de las personas de su interés como personal de la Institución, situación que podría atentar, en su caso, en contra de su vida, seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, así como el numeral Vigésimo Tercero de los *Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la información así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos)*, por ello, es oportuno realizar la transcripción de dichos preceptos legales mismos que son del tenor literal siguiente:

“Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Además de lo previsto en el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, que establece:

“Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud;** especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.”



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

En consecuencia, tomando en consideración lo dispuesto en el Octavo de los citados Lineamientos, así como en los artículos 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la causal de reserva invocada se sustenta a través de la aplicación de la prueba de daño siguiente:

I. Hacer público cualquier dato o información que haga identificable al personal operativo/sustantivo, así como al administrativo adscrito a esta Fiscalía General de la República, representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y a la seguridad pública y nacional, en virtud de que, como ya lo demostró esta Fiscalía General de la República en la controversia constitucional 325/2019, y así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de esta, e inclusive fue confirmado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución del recurso de revisión RRA 9481/19 BIS, se atendería de manera directa en contra de la vida, seguridad y salud de dichas personas, pues los miembros de las asociaciones delictivas podrían aprovechar esa información para amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permitan sustraerse de la acción de la justicia y, por lo tanto, quedar impunes, aunado a que podrían tomar represalias por las investigaciones instauradas en su contra, lo que impactaría en la capacidad de reacción y en la revelación del estado de fuerza de esta Institución, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, con la finalidad de cumplir no solo con objetivos conferidos constitucionalmente a la Fiscalía General de la República, sino también para mantener la seguridad pública y nacional del Estado mexicano -en la colaboración con todas las instituciones democráticas del país- es que dichas funciones son realizadas por las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, policías y peritos, e invariablemente por el personal administrativo adscrito a las diversas unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica, este último si bien es cierto que no está en la primer línea de intervención, también lo es que -por la naturaleza de las funciones de esta Institución-, en auxilio de aquellas, es quien tienen acceso a toda la información e insumos generados en la investigación de delitos, por lo que dar a conocer datos sobre estas pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares.

Así, resulta claro que la participación del personal administrativo es de vital relevancia, pues, desde la elaboración, envío y recepción de oficios entre las unidades administrativas o instituciones gubernamentales, hasta la integración de expedientes que en su caso se requieran, les es posible el acceso a información sensible contenida en esos documentos, que evidentemente debe ser resguardada con el mayor sigilo.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que en la aludida resolución de la controversia



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

constitucional 325/2019, el Alto Tribunal constitucional sostuvo que el personal administrativo tiene injerencia en la producción de información clave para procurar la impartición de justicia en el mercado criminal más peligroso de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que permitir a los agentes criminales conocer cualquier tipo de información del personal adscrito a la Fiscalía General de la República revelaría su capacidad de reacción; por ello, es perjudicial realizar la identificación de dicho personal, pues se pondría en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares. Además, concluyó que esta Fiscalía acreditó fehacientemente que, de entregarse la información requerida, se comprometería el ejercicio de las facultades constitucionales y con ello la seguridad pública del país.

En ese mismo contexto, durante la sustanciación de la controversia, respecto del informe rendido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia adscrito a la entonces Coordinación de Métodos de Investigación, la Corte confirmó que revelar la información de las personas servidoras públicas que integran a la Fiscalía General de la República las expone a distintos tipos de riesgos, dependiendo del mercado criminal de que se trate, pues esta Fiscalía debe llevar a cabo sus funciones bajo la perspectiva de mercados criminales, es decir, el personal opera en una dimensión específica de acuerdo con el tipo de delito de que se trate, por lo que la proporción del riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General se da en función de las actividades que desempeña su personal y la tasa de delitos por cada cien mil habitantes en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

Con dicho informe, se demostró que únicamente con entregar el nombre y cargo de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República, se permitiría acceder a datos identificativos, académicos, electrónicos, patrimoniales, biométricos y los referentes a familiares de las personas servidoras públicas. Por lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que revelar la identidad, cargo y otros datos concentrados de quienes están encargados de la investigación y persecución de los delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene la Institución y por consecuencia, vulneraría o afectaría el ejercicio de las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas a esta Fiscalía General de la República.

En esa tesitura, ha quedado demostrado de forma indubitable que, si dicha información y conocimientos cayeran en manos de la delincuencia, esta podría atentar, intimidar, coaccionar, violentar y en general poner en riesgo su vida, seguridad y salud de manera potencial en contra de estas personas, pudiendo realizar contra ellas actos inhumanos para allegarse de información.

En adición a lo anterior, la identificación de estas y de sus actividades en cumplimiento del servicio público que tienen encomendado permite que eventualmente puedan ser localizados mediante la búsqueda a través de instrumentos como internet y redes sociales.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

Luego, pueden ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues, además de tener disponible la información institucional, les sería posible conocer su ubicación y actividades rutinarias, lo cual sería de utilidad para interceptarlas; aspecto que, de ocurrir, impactaría negativamente en su seguridad, así como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.

II. El riesgo de perjuicio con la divulgación de los datos de identificación de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República supera el interés público general de que se difunda en razón de que, como ya se dijo, divulgar datos que lleven a la identificación y ubicación de las personas servidoras públicas de esta Institución, en cualquier categoría o puesto, los hace blancos identificables y no solo pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, sino también las actividades realizadas por esta Fiscalía General de la República, toda vez que podrían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información relacionada con el combate y persecución de los delitos federales.

El que los distintos mercados criminales identifiquen y conozcan plenamente al personal que compone a la Institución y cuenten con información respecto a su capacidad de fuerza y reacción, esto es, el número total de personal, sus cargos y dónde se encuentran ubicados, expone a esta Fiscalía General de la República a amenazas y ataques que necesariamente tienen implicaciones negativas en el ejercicio de sus competencias constitucionales y, por tanto, se compromete la seguridad pública de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la resolución emitida en la controversia constitucional en comento que esta Fiscalía acreditó con suficiente claridad la relación causal general entre la entrega de la información relativa a los servidores públicos de la Institución y la afectación a la seguridad pública.

Ahora bien, respecto a la acreditación de la conexión causal, la Suprema Corte, tomando en consideración la información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, concluyó que conociendo el nombre de las personas físicas que laboran en la Fiscalía General de la República y recopilando información de internet, es posible identificar plenamente a la persona; de modo que un simple dato que pudiera parecer inofensivo, puede arrojar información relativa a su edad, sexo, CURP, experiencia profesional, grado académico, domicilio laboral, inclusive cambios de adscripción, domicilio personal, bienes muebles e inmuebles, así como, características físicas, amigos, familiares y grado de parentesco, lo que incluye cónyuges, exparejas e hijos, así como la escuela en la que estudian estos; por lo que entregar el nombre de cualquier persona servidora pública de la Institución revelaría el 100% del estado de fuerza de la Institución.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

El anterior fenómeno puede ser explicado por la teoría del mosaico, la cual constituye una herramienta que da cuenta de cómo es que funciona el flujo de información y, con ello, la construcción de inteligencia. Se trata de un proceso que describe cómo se recopila, combina y procesa información, de tal manera que convierte información inofensiva en conocimiento útil. La metodología que se utiliza esencialmente consiste en recopilar piezas de información dispersas y después unir las con la finalidad de tener una visión de conjunto o "mosaico".

Como se ha establecido previamente, a partir de un dato que pudiese parecer inofensivo, como pudiera ser el nombre de una persona, potencializa que un agente criminal lo utilice para deducir, a partir de un dato independiente, una vulnerabilidad estratégica susceptible de explotación para fines mal intencionados, en este caso, para evadir la procuración de justicia o, peor aún, llevar a cabo actos de contrainteligencia para combatir frontalmente a los agentes encargados de la investigación y persecución de los delitos en los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que el Alto Tribunal estableció que, si bien es un derecho de las personas imputadas, conocer el nombre y datos del servidor público que lo acusa —salvo tratándose de delincuencia organizada donde la autoridad judicial puede autorizar se mantengan en reserva—, lo cierto es que conocer esa información no deriva del ámbito de protección del derecho de acceso a la información, sino del derecho a gozar de un debido proceso y una defensa adecuada. El que una persona en ejercicio de su derecho de acceso a la información solicite el nombre y cargo de todo el personal de la Fiscalía General de la República no quiere decir que deba obtener el mismo resultado, pues se trata del ejercicio de derechos distintos y de acceso a información diferente.

Adicionalmente, proporcionar la información no solo revelaría cuántas personas funcionarias públicas están al frente de la investigación y persecución de los delitos del orden federal a nivel nacional, sino también la Delegación Estatal a la que se encuentran adscritas y, en consecuencia, cómo se encuentran distribuidas y organizadas por entidad federativa; todo lo cual, invariablemente, revelaría su ubicación y organización, lo que implica dejar ver no solo su identidad, sino también la capacidad de reacción que tiene el Estado mexicano —a nivel de la República y por entidad federativa— para investigar y perseguir la comisión de los delitos federales. Dicho en otras palabras: permitir lo anterior, significa revelar información que impacta negativamente en el desempeño de las labores institucionales en relación con sus facultades y atribuciones constitucionales en materia de seguridad pública.

En cuanto a lo expuesto, debe tomarse en cuenta que la Fiscalía General de la República funciona como una corporación formada por eslabones, es decir, si alguno de los eslabones se ve afectado, el desempeño de sus funciones afecta las demás partes y funciones de la Institución; de modo que revelar información de inteligencia que afecta a una parte sustancial de la Institución equivaldría a provocar una vulneración a su funcionamiento en otros aspectos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

Robustecen lo anterior, las aclaraciones de la resolución de la aludida controversia constitucional 325/2019, hechas por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, en donde manifiesta que:

“...está de por medio la integridad de los servidores públicos de la FGR que son quienes materializan las funciones constitucionales del ente autónomo, pues constituye hecho notorio que el clima de violencia criminal en el que ejercen sus funciones tanto las instituciones de procuración de justicia, como las instituciones policiacas e, inclusive, algunos miembros de la judicatura genera enormes riesgos que es necesario disminuir en beneficio de tales personas, pues ello redundaría en la protección de los derechos humanos más elementales de los integrantes de nuestra sociedad en general.

...

Difundir los nombres de algunos de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y de otras personas de la FGR, a personas diversas de las que participan en los procesos penales federales, así como revelar la estructura administrativa de sus áreas administrativas, debilita la seguridad pública, cuyos fines son, como ya expuse, la salvaguarda de los derechos humanos relativos a la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

...

Además, la Constitución Federal no realiza distinción alguna entre un tipo de personal y otro de la FGR, sino que su artículo 21 se refiere a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, por lo que considero que esta protección de reserva de datos incluye a todos los integrantes que conformen a todo ese ente constitucional autónomo, sin discriminar a ninguno de sus integrantes, y mucho menos privarlo de la protección que le brinda la reserva tanto de sus datos, como de la estructura administrativa a la que pertenece.

Las personas servidoras públicas administrativas de la FGR también forman parte de la estructura para la investigación y el combate al delito, y son también vulnerables de poner en riesgo su vida, seguridad y salud, no considerarlo así, constituye una postura discriminatoria, como si solamente los Agentes del Ministerio Público Federal correrán riesgos y los demás empleados estuvieran exentos, no obstante que unos y otros comparten espacios de trabajo e intervienen en los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la FGR.”

Bajo esa tesitura, la divulgación de la información relacionada al personal adscrito a esta Institución federal actualiza el riesgo de perjuicio a la vida, seguridad o salud, así como para sus familias y personas cercanas, por lo que el ejercicio de ponderación de derechos de la colectividad que debe prevalecer, es aquel relacionado con la procuración de justicia bajo los



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

principios constitucionales contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

III. La limitación se adecúa al **principio de proporcionalidad** y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que, si bien es cierto que el artículo 6 constitucional reconoce el derecho de acceso a la información, la Suprema Corte al resolver el amparo directo 2931/20152, concluyó de manera esencial que el derecho a ser informado no es absoluto, pues, a pesar de que el Estado tiene la obligación de informar a la población sobre temas de interés y relevancia pública, también se debe proteger y garantizar el derecho a la vida, seguridad y salud de las personas, así como a la salvaguarda de la seguridad pública y nacional.

De ahí se tiene que la calidad de persona servidora pública no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad y privacidad, que deben gozar todas las personas. Por el contrario, existe un interés general o superior en esos derechos frente al derecho de acceso a la información de un particular, en una ponderación frente a los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de sus familias y círculo cercano, información la cual debe ser considerada como clasificada.

En ese sentido, tomando en consideración la proporción de riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General de la República, las funciones que desempeña el personal y la tasa de delitos del orden federal en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el revelar la identidad y cargo de quienes tienen la responsabilidad de investigar y perseguir delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene esta Institución y, por consecuencia, vulneraría las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas.

Por lo expuesto, se concluye que clasificar como reservada la información o datos que permitan la identificación, inclusive de aquella que asevere su adscripción en el presente o pasado, como personas servidoras públicas Fiscalía General de la República, resulta el medio menos restrictivo frente al derecho de acceso a la información en cualquiera de sus diferentes manifestaciones.

Robusteciendo lo anterior, es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguiente Tesis, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afectan intereses nacionales o **derechos de terceros**, tales como el **derecho a la vida**, la salud o en su caso la privacidad de los gobernados, a saber:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Finalmente, no se omite señalar que, la presente solicitud de información fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Institución, el cual en su **Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria** celebrada el día 09 de julio de 2024, determinó procedente la reserva del pronunciamiento institucional de lo peticionado, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo **110 fracción V de la LFTAIP**. Por lo que hace al acta respectiva, así como el periodo de reserva, podrá consultarlos en su momento en la siguiente liga electrónica:

<http://www.fgr.org.mx/en/transparencia/AccesoInformacionPublica>

Si derivado de la respuesta a su solicitud de información le surge alguna duda, puede llamar al teléfono (55) 5346 0000, extensión 505716; o bien, escribirnos al correo electrónico leydetransparencia@fgr.org.mx, en donde con gusto le atenderemos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

...” (sic)

3. Interposición del recurso de revisión. El once de julio de dos mil veinticuatro, se recibió en este Instituto, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos siguientes:

Acto que se Recurre y Puntos Petitorios:

“Negó información respecto a datos laborales de servidores públicos.” (sic)

4. Turno del recurso de revisión. El once de julio de dos mil veinticuatro, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente **RRA 9880/24** al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada Ponente, para los efectos del artículo 156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

5. Admisión del recurso de revisión. El dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, se dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión, y se puso el expediente a disposición de las partes para que, en un plazo máximo de siete días hábiles contados a partir de su notificación, manifestaran lo que a su derecho correspondiera, ofrecieran pruebas y/o se formularan alegatos.

Asimismo, se formuló un requerimiento de información al sujeto obligado a efecto de que informara a este Instituto lo siguiente:

“ ...

1. Si las CC. Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno Moreno se encuentran o se encontraron adscritos a alguna de las unidades con las que cuenta, en caso de que la respuesta sea en sentido afirmativo, indique el área de adscripción.
2. El puesto con el que cuentan o contaban dichas personas.
3. Enliste las funciones que realizan o realizaron cada una de ellas como personal adscrito a la Fiscalía General de la República.

...” (sic)

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

6. Notificación de la admisión a la parte recurrente. El cinco de agosto de dos mil veinticuatro, en el medio señalado para tales efectos, se notificó a la parte solicitante la admisión del recurso de revisión.

7. Notificación de la admisión al sujeto obligado. El cinco de agosto de dos mil veinticuatro, se notificó al sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la admisión del recurso de revisión.

8. Alegatos del sujeto obligado. El catorce de agosto de dos mil veinticuatro, se recibió en este Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio FGR/UETAG/00/2024, del ocho del mismo mes y año de su recepción, emitido por la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental del sujeto obligado, y dirigido a la Comisionada Ponente, a través del cual manifestó los siguientes alegatos:

“ ...

A L E G A T O S

PRIMERO. Es preciso mencionar que este Sujeto Obligado cumplió cabalmente con los tiempos y formas previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente al momento de la interposición de la solicitud, así como con lo dispuesto en los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, puesto que la petición se derivó para su atención a la Oficialía Mayor (**OM**); toda vez que de las atribuciones que le confiere la Ley de la Fiscalía General de la República (**LFGR**), el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República (**EOFGR**) y demás normatividad aplicable, se desprende que es la unidad administrativa que pudiera contar con la información requerida.

SEGUNDO. Respecto del agravio señalado por el particular, se advierte que el recurrente se inconforma por la clasificación del pronunciamiento sobre la existencia o no de la información. Sin embargo, se reitera la respuesta inicial, consistente en que existe una imposibilidad jurídica para aseverar o negar la adscripción de esas personas a esta Institución, toda vez que, hacerlo, pondría en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de las personas de su círculo cercano.

TERCERO. En atención al requerimiento de información adicional, así como con la intención de brindarle mayores elementos que le permitan contar con insumos suficientes para resolver el medio de impugnación que nos ocupa, en calidad de información clasificada y para el uso exclusivo de esa Ponencia, se informa lo siguiente:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

1. Si las CC. Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno Moreno se encuentran o se encontraron adscritos a alguna de las unidades con las que cuenta, en caso de que la respuesta sea en sentido afirmativo, indique el área de adscripción.

2. El puesto con el que cuentan o contaban dichas personas.

Se hace de su conocimiento que **Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno Moreno** se encuentran **adscritas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales**, mismas que **ostentan los puestos de Directora General Adjunta de Averiguaciones Previas y Auxiliar Ministerial C**, respectivamente.

3. Enliste las funciones que realizan o realizaron cada una de ellas como personal adscrito a la Fiscalía General de la República.

Al respecto, se hace del conocimiento que el **personal señalado realiza funciones operativas encaminadas a la investigación y persecución de delitos federales**, especialmente en materia electoral, pero que pudieran encontrarse relacionados inclusive con la materia de delincuencia organizada.

En ese contexto, es importante concientizar a ese Instituto que el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, tiene como encomienda garantizar el Estado de Derecho mediante la implementación de estrategias orientadas a la investigación y persecución de los delitos en materia electoral y fortalecer la confianza ciudadana a través de una procuración de justicia eficaz y eficiente apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.

Por lo tanto, divulgar información que hace identificables a sus servidores públicos podría ponerlos en riesgo, toda vez que integrantes de los grupos criminales pudieran amenazarlos, coaccionando y/o amedrentando para disuadirlos a continuar con las investigaciones a su cargo, ante el riesgo inminente que pudiese haber respecto a su vida, seguridad e integridad y la de su familia.

No es óbice el señalar que, según datos de Laboratorio Electoral, en el proceso electoral 2023-2024 fueron asesinadas 82 personas relacionadas con delitos en materia electoral, de las cuales 34 eran aspirantes a una candidatura, 65 hombres, 13 mujeres y 4 personas de las cuales no fue posible determinar su género; por otro lado, desde el 4 de junio de 2023 al 23 de mayo de 2024, se reportaron 272 casos relacionados con delitos en materia electoral, 65 atentados, 108 casos de amenazas y 17 secuestros.

Aunado a ello, en este periodo se registraron otros 74 candidatos que sufrieron algún tipo de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

ataque violento por parte de la delincuencia organizada u otras agresiones como ataques armados donde alguien cercano al candidato murió, o sufrió algún tipo de atentado, secuestro, y/o amenazas tangibles o bien, en el caso de los candidatos, tuvieron consecuencias como renunciar a la contienda.

Además, según información de Data cívica, se registraron ataques a 42 integrantes de partidos políticos, 157 servidores públicos que padecieron alguna agresión o ataque de la delincuencia organizada en el periodo de campañas y 25 familiares de dichos servidores públicos también atacados. Con estos datos, la organización concluyó que el periodo electoral 2023-2024 fue más violento que el de 2020-2021 y también más violento que 2018.

Derivado de lo anterior, el personal de la Fiscalía aludida comanda las investigaciones relacionadas con la compra o coacción del voto, la retención de credenciales para votar sin causa justificada, uso indebido de recursos públicos federales, uso de programas sociales con fines político-electorales y hacer proselitismo en la jornada electoral.

Otras conductas que son sancionadas es la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de casillas, introducir, sustraer urnas o boletas electorales, modificar o alterar documentos oficiales y acarreo de votantes el día de las elecciones, que influyan en el sentido del voto, así como la destrucción de material electoral, impedir la instalación o clausura de casillas, introducir, sustraer urnas o boletas electorales, modificar o alterar documentos oficiales y acarreo de votantes el día de las elecciones, que influyan en el sentido del voto.

Sin embargo, la realidad que enfrenta hoy en día el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, es el financiamiento y uso de los recursos de los partidos políticos; pues, existe una preocupación latente respecto a los recursos de los partidos políticos y de los candidatos para que no se infiltre el dinero del crimen organizado; es decir, ya no es suficiente con fiscalizar que el financiamiento público prevalezca sobre el privado o que no se rebasen los topes legalmente permitidos, sino el origen lícito de las aportaciones de los particulares.

Aunado a que, la máxima preocupación para nuestro sistema electoral es la posible participación activa y directa de candidatos involucrados con el crimen organizado, en donde las organizaciones criminales buscan esquemas para garantizar sus intereses y protección de forma previa a la llegada del poder de gobernantes y representantes populares; en ese sentido, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, busca generar medidas de carácter preventivo que eviten a las organizaciones criminales el que se infiltren en los procesos electorales y castigar a quienes siendo miembros de delincuencia organizada pretendan involucrarse en los procesos electorales o cuando se pruebe el dolo de un candidato o precandidato de involucrarse en la contienda electoral para favorecer los



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

intereses de la delincuencia organizada y que sea considerado un delito electoral.

Es a todas luces evidente que, la delincuencia organizada constituye una amenaza para el desarrollo de los procesos electorales, y es a través del uso de dinero ilícito como ésta puede infiltrarse en las campañas políticas y como ya se ha señalado previamente, derivado de los recientes acontecimientos en el proceso electoral de este año, deja en evidencia que diversos grupos de la delincuencia organizada cuentan cada día con mayor capacidad para atentar contra el Estado, de ahí que sea una exigencia inminente el fortalecimiento y la actuación oportuna de la institución y por ende la seguridad y protección de quienes detentan cargos como servidores públicos, sobre todo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, al hacer frente a la delincuencia organizada respecto al uso de recursos de procedencia ilícita que se pudiera infiltrar en las campañas electorales.

Desde esa perspectiva, la difusión de la información solicitada podría poner en riesgo la vida, seguridad y salud del personal adscrito a esa Fiscalía, y con ello, vulnerar las actividades de persecución e investigación de los delitos a cargo de ese ministerio público.

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito:

PRIMERO. - En atención a las consideraciones señaladas en el presente escrito, tener por reconocida mi personalidad, y por hechas las manifestaciones en él contenidas.

SEGUNDO. - En su oportunidad y previo los trámites de ley, **confirme** la respuesta otorgada por esta Fiscalía General de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 fracción II, de la **LFTAIP**.
..." (sic)

10. Cierre de instrucción. El diez de septiembre de dos mil veinticuatro, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción del presente medio de impugnación; el acuerdo fue notificado a las partes.

11. Engrose. El once de septiembre de dos mil veinticuatro, fue sometido a consideración del Pleno de este Instituto el proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente **RRA 9880/24**, el cual fue presentado por la Comisionada Ponente, mismo que no fue aprobado por mayoría de los Comisionados presentes. En ese sentido, se votó que la Ponencia de la Comisionada Josefina Román Vergara se encargaría de la elaboración del engrose correspondiente.

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 280/2023, y con fundamento en los artículos 6°, Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción II, 146, 150 y 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción II, 151, 156 y 157 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 6°, 10, 12, fracciones I, V y XXXV, y 18, fracciones V, XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento.

Este Instituto procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 161 y 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente.

Causales de improcedencia

En el artículo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se dispone lo siguiente:

“Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando:

- I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 147 de la presente Ley;
- II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 148 de la presente Ley;

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 150 de la presente Ley;

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI. Se trate de una consulta, o

VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.”

De tal forma, a continuación se verificará si en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de improcedencia mencionadas en el precepto legal en cita.

I. Oportunidad del recurso de revisión. El artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé que, el recurso de revisión debe interponerse dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

El presente recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo señalado, toda vez que la respuesta a la solicitud de información fue proporcionada el **diez de julio de dos mil veinticuatro**, mientras que, el recurso de revisión fue interpuesto el **once de julio** del mismo año, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante; lo anterior, tomando en consideración que el plazo comenzó a computarse, el once de julio de dos mil veinticuatro, y feneció el catorce de agosto de dos mil veinticuatro, descontando del cómputo del plazo los días trece, catorce, del veinte al treinta y uno de julio, así como del primero al cuatro, diez y once de agosto de dos mil veinticuatro, por tratarse de días inhábiles, por lo que a la fecha de la presentación del medio de impugnación, transcurría en el primer día hábil.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia, de conformidad con el artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el “Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

para el año 2024 y enero de 2025.”

II. Medio de defensa o recurso tramitado ante el Poder Judicial. Este Instituto no tiene conocimiento de que, a la fecha en la que se resuelve el presente medio de impugnación, se encuentre en trámite algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación interpuesto por la parte recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de revisión.

III. Procedencia del recurso de revisión. Los supuestos de procedencia del recurso de revisión se encuentran establecidos en el artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el caso concreto, resulta aplicable el previsto en la fracción I, toda vez que la parte recurrente se inconformó por clasificación de la información requerida.

IV. Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no realizó prevención alguna al particular derivado de la presentación de su recurso de revisión, ya que cumplió con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio.

VI. Consulta. No se realizó una consulta en el presente caso.

VII. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso de revisión.

Causales de sobreseimiento

En el artículo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece lo siguiente:

“**Artículo 162.** El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

- I.** El recurrente se desista expresamente del recurso;
- II.** El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se disuelvan;

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.”

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria haya fallecido, se desistiera expresamente del recurso de revisión, que el sujeto obligado hubiere modificado o revocado el acto reclamado, de tal manera que el recurso de revisión quedase sin materia, o que una vez admitido, apareciera alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por consiguiente, ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 162 del citado ordenamiento jurídico, se actualiza.

En consecuencia, este órgano colegiado se avocará al estudio de fondo del presente asunto.

TERCERO. Síntesis del caso.

Una persona solicitó que la Fiscalía General de la República le proporcionara, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el nombre, nivel del cargo, sueldo y la dirección en la que se encuentran adscritas dos servidoras públicas plenamente identificadas.

En respuesta, la Fiscalía General de la República informó en esencia que, una imposibilidad jurídica para pronunciarse sobre la existencia o no de la información solicitada, en virtud de que, hacerlo sería proporcional a aseverar la adscripción de las personas identificadas en la solicitud de acceso como personal adscrito al sujeto obligado, situación que podría atentar en contra de su vida, seguridad y salud, de conformidad con el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, expuso sus consideraciones respecto a la prueba de daño.

Asimismo, el sujeto obligado señaló que la reserva de la información fue aprobada por el Comité de Transparencia en la **Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria**, del nueve de julio

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la República

Folio de la solicitud: 330024624001568

Comisionada Ponente y encargada del engrose: Josefina Román Vergara

de dos mil veinticuatro, del cual se proporcionó un hipervínculo para su consulta.¹

Inconforme con la respuesta de la Fiscalía General de la República, la persona recurrente interpuso recurso de revisión por medio del cual manifestó que negó la información respecto a datos laborales de servidores públicos.

Al respecto, en aplicación de la suplencia de la queja prevista en el artículo 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que el agravio de la parte recurrente consiste en controvertir la clasificación de la información y la falta de fundamentación y motivación.

En alegatos, la Fiscalía General de la República defendió y reiteró la legalidad de su respuesta señalando que, el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, tiene como encomienda garantizar el Estado de Derecho mediante la implementación de estrategias orientadas a la investigación y persecución de los delitos en materia electoral y fortalecer la confianza ciudadana a través de una procuración de justicia eficaz y eficiente apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos

Por lo tanto, divulgar información que hace identificables a sus servidores públicos podría ponerlos en riesgo, toda vez que integrantes de los grupos criminales pudieran amenazarlos, coaccionando y/o amedrentando para disuadirlos a continuar con las investigaciones a su cargo, ante el riesgo inminente que pudiese haber respecto a su vida, seguridad e integridad y la de su familia; en consecuencia, la difusión de la información solicitada podría poner en riesgo la vida, seguridad y salud del personal adscrito a esa Fiscalía, y con ello, vulnerar las actividades de persecución e investigación de los delitos a cargo de ese ministerio público.

En consecuencia, conforme a las constancias que integran el expediente, la presente resolución determinará la legalidad del actuar del sujeto obligado en relación con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables.

¹ Consultable en: <https://www.fgr.org.mx/en/transparencia/AccessoInformacionPublica>

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la República

Folio de la solicitud: 330024624001568

Comisionada Ponente y encargada del engrose: Josefina Román Vergara

CUARTO. Estudio de Fondo.

En el presente considerando se analizará la respuesta emitida por el sujeto obligado, en relación con el agravio hecho valer por la persona recurrente en cuanto a la clasificación de la información requerida.

Ahora bien, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública², establece cómo debe acotarse el proceder de los sujetos obligados **tratándose de información o documentos clasificados**, tal como se señala a continuación:

“Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:

...

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

...

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán, además de lo establecido en el Título Sexto de la Ley General, las disposiciones de la presente Ley. Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información previstas en el presente Título y deberán acreditar su procedencia, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes, de conformidad con lo establecido en la Ley General.

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información.

² Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, y su última reforma del 1 de abril de 2024. Consultable en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 102. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la confirmación de la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 103. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

Artículo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

I. Confirmar la clasificación;

II. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y

III. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 135 de la presente Ley."

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

En términos de los preceptos legales en cita, se desprende que los Comités de Transparencia de los sujetos obligados cuentan con facultades para confirmar, modificar o revocar –entre otros- la clasificación de la información que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados.

Así, se establece que la clasificación de la información es una excepción al derecho de acceso a la información, ésta se trata de un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información que obra en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, misma que debe aplicarse de manera restrictiva y limitada, debiendo acreditar su procedencia.

En esta tesitura, cuando se trate de información clasificada, el Comité de Transparencia resolverá, de manera fundada y motivada, ya sea confirmando, modificando o revocando la clasificación invocada por el área administrativa, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta a alguna causal de clasificación.

La resolución que al efecto sea emitida, deberá ser notificada al solicitante en un tiempo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud.

Además de lo anterior, el sujeto obligado debe fundar y motivar la reserva mediante la prueba de daño prevista en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,³ el cual señala lo siguiente:

“Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.”

³ Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

Es decir, la prueba de daño que lleve a cabo el sujeto obligado debe justificar que: **(i)** la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; **(ii)** el riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda y **(iii)** que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Con base en ello, a continuación, se procederá al análisis de la **reserva sustentada en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**.

En primer lugar, conviene apuntar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece lo siguiente:

“Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;”

Conforme a lo anterior, se advierte que la información susceptible de clasificarse como reservada es aquella que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.

En el mismo tenor, el Vigésimo tercero de la Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas⁴ indica lo siguiente:

“Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o

⁴ Publicado en el Diario Oficial de la Federación, su última reforma del 18 de noviembre de 2022. Consultable en: https://snt.org.mx/wp-content/uploads/30112022-Lineamientos-de-Clasificacion-y-Desclasificacion-01_14h.pdf

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

riesgo que causaría su difusión.”

Con base en lo anterior, para poder invocar el supuesto de reserva previsto en la fracción V, del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es necesario acreditar un vínculo, entre una o varias personas físicas y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud; especificando cuál de estos bienes jurídicos será afectado, así como el potencial daño o riesgo que causaría su difusión.

Dicho lo anterior, se debe señalar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública considera como información pública de oficio, los datos de servidores públicos, ya que su publicidad permite cumplir los objetivos que persigue dicha ley, entre los que se encuentran transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, sin embargo, en términos del artículo 68 de la Ley en comento, como excepción a la regla general sobre la divulgación de esta información encuentre en alguno de los supuestos de clasificación, ya sea reservada o confidencial.

En atención a la reserva invocada por la Fiscalía General de la República, cabe precisar que el artículo 6° Constitucional que dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

Asimismo, es importante tomar en consideración que, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 3 que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona; salvo, que deba reservarse de forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

Igualmente, en el artículo 97 de la Ley Federal de la materia citada, se señala que la clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

En ese sentido, conviene mencionar que por regla general, el directorio de servidores públicos y la información que pueda obrar en su expediente personal, creado con motivo del cargo público que en su caso desempeñen, es una obligación de transparencia contemplada en el artículo 70, fracciones VII, VIII, X, XII, XVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), por lo que es información de naturaleza pública.

No obstante, existe una excepción relativa a aquellos servidores públicos que realicen actividades operativas en materia de seguridad, tal y como lo sostiene el **Criterio-SO/006/2009**, aplicable por analogía; el cual, señala que existen servidores públicos tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional, a través de acciones preventivas y correctivas, encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones, en ese sentido, una de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha situación, por lo que la reserva de los nombres y de las funciones que desempeñan o desempeñaron estos servidores públicos puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes.

Es así como, el nombre de servidores públicos que desempeñan funciones de carácter operativas, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública son susceptibles de clasificarse como información reservada.

Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la República

Folio de la solicitud: 330024624001568

Comisionada Ponente y encargada del engrose: Josefina Román Vergara

En ese sentido, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia. **La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos**, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Carta Magna señala.

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. **El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.**

En ese sentido, la Ley de la Fiscalía General de la República⁵ señala:

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio; ejercerá sus facultades atendiendo al orden público e interés social.
[...]

Artículo 7. En la investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delitos de su competencia, el Ministerio Público de la Federación se auxiliará de las policías, incluyendo la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública del fuero federal o común, así como de las personas investigadoras, personas peritas, personas analistas, y personas facilitadoras, quienes actuarán bajo su mando y conducción, en términos de lo dispuesto en

⁵ Publicado en el Diario Oficial de la Federación, su última reforma del 01 de abril de 2024. Consultable en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFGR.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las demás leyes y normatividad aplicable.

[...]

Artículo 11. La Fiscalía General, para el ejercicio de sus facultades, estará integrada por:

;

...

V. La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales;

...

Artículo 39. La Fiscalía General contará con personal directivo y de mando, personas agentes del Ministerio Público de la Federación, personas agentes de la Policía Federal Ministerial, personas peritas, personas analistas y personas facilitadoras, así como personas servidoras públicas especializadas, profesionales, técnicas y administrativas necesarias para la realización de sus funciones previstas en las disposiciones legales aplicables.

...

Artículo 40. Son facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación las siguientes: I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal; II. Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia; III. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; IV. Iniciar con eficiencia, puntualidad y eficacia la investigación que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 131, fracción V, del Código Nacional, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito; V. Investigar y perseguir los delitos del fuero común respecto de los cuales se haya ejercitado la facultad de atracción, en los términos de las disposiciones aplicables.

...

Artículo 41. Con independencia de las facultades que señalan la Constitución, el Código Nacional, y las demás disposiciones aplicables, las personas agentes de la Policía Federal Ministerial deberán actuar durante la investigación bajo la conducción y mando de la persona agente del Ministerio Público de la Federación, en ejercicio de las siguientes facultades: I. Investigar hechos que puedan ser constitutivos de delito y los bienes relacionados o producto del mismo, llevando a cabo las técnicas de investigación autorizadas al efecto y que resulten necesarias; II. Constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, mediante los actos de investigación que resulten necesarios conforme a su ámbito de facultades; III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos y la identidad de las personas autores o de las personas partícipes en la comisión del delito, por lo que si durante la realización de actos de investigación se percata de la probable comisión de un delito diverso deberá dar cuenta inmediatamente a la persona agente del Ministerio Público de la Federación y proceder a su investigación.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

...” (sic)

De la normatividad citada previamente, es posible desprender lo siguiente:

- La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio **a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación**, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables.
- Tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.
- Específicamente, corresponde a la Fiscalía General de la República:
 - ❖ Investigar y perseguir los delitos;
 - ❖ Ejercer la acción penal;
 - ❖ Procurar la reparación del daño de las víctimas;
 - ❖ Adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales;
 - ❖ Intervenir en el proceso de ejecución penal;
 - ❖ Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva, e
 - ❖ Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
- La Fiscalía cuenta con diverso personal que realiza funciones de carácter operativo, en cumplimiento a sus actividades de investigación y persecución de delitos, tales como los Agentes del Ministerio Público, peritos, policías, entre otros.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

- La Fiscalía General contará con personal directivo y de mando, personas agentes del **Ministerio Público de la Federación**, personas agentes de la Policía Federal, personas peritas, personas analistas y personas facilitadoras, así como personas servidoras públicas especializadas, profesionales, técnicas y administrativas necesarias para la realización de sus funciones.
- Por su parte, las **personas agentes del Ministerio**, se encargan de investigar y perseguir los delitos del orden federal; de promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia; de recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; de Investigar y perseguir los delitos del fuero común respecto de los cuales se haya ejercitado la facultad de atracción, en los términos de las disposiciones aplicables, etc.
- Por su parte, las personas agentes de la Policía Federal Ministerial deberán investigar hechos que puedan ser constitutivos de delito y los bienes relacionados o producto del mismo, llevando a cabo las técnicas de investigación autorizadas al efecto y que resulten necesarias; constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, mediante los actos de investigación que resulten necesarios conforme a su ámbito de facultades; etc.

Tomando en consideración lo anterior, así como las funciones que realizan las áreas del sujeto obligado, es posible advertir que diversos de los servidores públicos tienen a su cargo **funciones operativas relacionadas con la seguridad pública**.

Por otro lado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública⁶ dispone lo siguiente:

“Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia

⁶ Disponible: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;

...

X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;

..."

Ahora bien, al considerar el análisis anteriormente efectuado, y observar que las tres figuras como los Ministerios, los peritos y los policías ministeriales de investigación, realizan funciones diversas.

Para el caso que nos ocupa, este Órgano Garante advierte que los puestos que ostentan las personas de las que se requiere información es el de Directora General Adjunta de Averiguaciones Previas y Auxiliar Ministerial C, respectivamente, ambas adscritas a la **Fiscalía Especializada en Delitos Electorales**.

En ese sentido, es importante destacar que, de conformidad con sus funciones los Agentes del Ministerio Público, solamente podrían actualizar el riesgo real, demostrable e identificable relativo a que se ponga en riesgo su vida, salud o seguridad, si se trataran de servidores públicos adscritos a la **Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada**.

Lo anterior tiene sustento, pues la identificación de quienes realizan actividades sustantivas, provocaría que puedan ser objeto de extorsiones, sobornos, dentro de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, se pueden ver tentados o amenazados por parte de los sujetos investigados o diversos, con el fin de que dicho

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

personal les proporcione información privilegiada respecto de las investigaciones que se realizan o realizarán, vinculadas con delincuencia organizada, y con ello anticiparse para obtener un resultado favorable; de ahí que la protección de su identidad sea necesaria en aras de evitar que los agentes externos puedan realizar acciones en su contra.

En específico, **el Pleno ha sostenido dicho criterio**, al tomar en consideración el alto impacto social de la delincuencia organizada; de conformidad con la Organización Internacional de Policía Criminal, informa que la delincuencia organizada por lo general, **son redes delictivas organizadas que están implicadas en muchos tipos diferentes de actividades delictivas extendidas por varios países**. Estas actividades pueden incluir trata de personas, tráfico de drogas, mercancías ilícitas y armas, robo a mano armada, falsificaciones y blanqueo de capitales, lo anterior, es evidente que se traduce en que, la delincuencia organizada tiene un grado de alcance criminal, superior que la comisión unipersonal de un delito¹.

El jurista Javier Dondé Matute señala que, los delitos perpetrados por la delincuencia organizada se tratan de actos de violencia de **alto impacto** que buscan generar terror entre los miembros de las organizaciones propias o diversas y en la población civil, o con el objeto de coaccionar al gobierno en la defensa de sus negocios ilícitos.

El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional le da contenido al concepto de seguridad nacional que emplea el Código Penal Federal. Si bien no se menciona expresamente que la delincuencia organizada sea considerada una actividad que menoscabe la seguridad nacional, impedir que se la combata sí es un tema de seguridad nacional.

En este sentido, los juristas sostienen que las conductas violentas atribuibles a la delincuencia organizada tienen como efecto generar impunidad y constituyen ataques a la seguridad nacional, lo que genera arribar a la conclusión de que, es procedente la clasificación de los nombres de los **ministerios públicos que se encuentran adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia e Delincuencia Organizada**.

Ahora bien, dado que se señaló con especificidad que la adscripción de las personas es ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, no es posible establecer la forma

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la República

Folio de la solicitud: 330024624001568

Comisionada Ponente y encargada del engrose: Josefina Román Vergara

en que se pondría en riesgo su vida, pues si bien realizan la investigación, prosecución y persecución de delitos, la realidad es que su actuar no se encuentra dentro de actividades vinculadas con la delincuencia organizada.

Ahora bien, con independencia de lo manifestado por el sujeto obligado en desahogo del RIA, en el sentido de que con motivo de los comicios 2023-2024, se registraron otros 74 candidatos que sufrieron algún tipo de ataque violento por parte de la delincuencia organizada, lo cierto es que el ámbito de competencia, de las servidoras públicas como ya quedó establecido son los presuntos delitos electorales, lo que no puede guardar relación con los ataques mencionados.

En ese sentido, contrario a lo esgrimido por la Fiscalía General de la República, **la publicidad de los datos requeridos respecto de personal ajeno a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, resulta de vital importancia e interés público**, pues son las principales encargadas de realizar las funciones del Ministerio Público para la persecución de los delitos, ello en atención al artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, entre otras, las siguientes atribuciones:

- Investigar y perseguir los delitos del orden federal.
- Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia.
- Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito.
- Iniciar con eficiencia, puntualidad y eficacia la investigación que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 131, fracción V, del Código Nacional, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito.
- Investigar y perseguir los delitos del fuero común respecto de los cuales se haya ejercitado la facultad de atracción.
- Determinar la procedencia de la detención de las personas imputadas por la comisión de hechos que la ley señale como delito.
- Realizar el aseguramiento y registro de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

- Participar en todas las etapas del procedimiento penal, desde la investigación inicial hasta que se dicte sentencia, conforme a lo previsto en el Código Nacional.
- Impugnar, en los términos previstos por la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables, las resoluciones judiciales.
- Informar a la persona víctima o a la persona ofendida del delito, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y las demás disposiciones legales aplicables, así como sus alcances, incluyendo el derecho de designar a la persona asesora jurídica.
- Garantizar en toda la investigación y el proceso penal los derechos de las personas víctimas establecidos en la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y en las leyes aplicables.
- Acceder, de conformidad con la legislación aplicable a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas.
- Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que así lo requieran las leyes aplicables.
- Informar y facilitar a las personas víctimas de nacionalidad extranjera el ejercicio del derecho a recibir asistencia consular por las embajadas o consulados, y comunicar sin demora esos hechos a dichas representaciones diplomáticas; con independencia de la asistencia y protección que les brinde las disposiciones jurídicas aplicables.
- Dictar las medidas necesarias para que la persona imputada reciba atención médica o psicológica de emergencia y demás medidas de protección idóneas para su seguridad, así como asegurar su cumplimiento, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
- Dictar las medidas necesarias que permitan garantizar la reparación del daño para la persona víctima o la persona ofendida.
- Presentar la acusación contra la persona imputada ante la autoridad judicial competente, y en general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos.
- Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas, así como las medidas de seguridad que en su caso correspondan.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

- Intervenir en el procedimiento de ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad en los términos de las disposiciones legales aplicables.
- Intervenir en la extradición, entrega o traslado de personas imputadas, procesadas o sentenciadas, en los términos de las disposiciones aplicables, así como en cumplimiento de los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte.
- Solicitar y, en su caso, proporcionar la asistencia jurídica internacional que le sea requerida de conformidad con los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte y lo dispuesto en la legislación aplicable.

Por lo que, proporcionar los nombres del personal ajeno a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, y su actuar debe de estar sujeto a escrutinio público, considerando que a través de esto es posible verificar las acciones y los servidores públicos que se encargan de perseguir delitos, además es deber del sujeto obligado publicitar el directorio de servidores públicos, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A efecto de robustecer lo analizado, este Instituto realizó una búsqueda de información en fuentes de acceso públicas, localizando que, respecto de la servidora pública Verónica Athenea Maldonado Cruz su cargo y adscripción son de conocimiento público, pues fue participante en conferencias con motivo de su desempeño como a continuación se observa:



#Entérate ● En su intervención la titular de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República,...

Televisión Tabasqueña
21 de mayo ·
#Entérate ● En su intervención la titular de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, Verónica Athenea Maldonado Cruz, precisó que la figura de la mujer debe vincularse con el ámbito político, aunque muchos no están acostumbrados está no debe desaparecer, así será más presente.
Ver menos



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

Las nota referida es valorada de conformidad con la tesis número 922656 titulada **“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA⁷”** misma que refiere, que las **notas periodísticas**, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren.

Conforme a lo anterior, este Instituto advierte que el agravio de la parte recurrente, fundamentado en la fracción I, del artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta **fundado**, pues no es procedente la clasificación del nombre del puesto, nivel del cargo, sueldo, así como la dirección que se encuentran adscritas las servidoras públicas Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno Moreno, de conformidad con el artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por tanto, en tanto que no se validó la clasificación invocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto determina que lo procedente es **REVOCAR** la respuesta de la Fiscalía General de la República, y se instruye al sujeto obligado a efecto de que proporcione a la persona recurrente la información requerida, dando cumplimiento al resolutivo **SEGUNDO** de la presente resolución.

Lo anterior es así, ya que, si bien, la suscrita no comparte el criterio sostenido por la mayoría del Pleno, toda vez que considero que procedía clasificar la información con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley de la materia; no obstante, lo cierto es que, la falta de disenso o convergencia de ideas de los integrantes del pleno no puede ser motivo para retrasar la emisión del fallo que resuelve el presente asunto y coartar el derecho de acceso a la información de los solicitantes; máxime, que se debe velar estrictamente por el principio de celeridad en los procedimientos de acceso a la información que debe velar esta autoridad; de ahí, que se haya presentado la resolución del recurso que nos ocupa conforme al criterio que preponderó y en atención a los valores y principios que nos rigen, con la finalidad de ser congruentes con el criterio de esta Comisionada, es que la presente resolución se sometió al pleno por cortesía.

⁷ Disponible en: <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/922/922656.pdf>

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la República

Folio de la solicitud: 330024624001568

Comisionada Ponente y encargada del engrose: Josefina Román Vergara

En ese tenor y de acuerdo con la interpretación en el orden administrativo que a este Instituto le da el artículo 21, fracción I la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Pleno, a efecto de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública consignado a favor del recurrente:

RESUELVE

PRIMERO. Se **REVOCA** la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo con el considerando CUARTO de la presente resolución.

SEGUNDO. Se **instruye** al sujeto obligado para que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, en los siguientes términos:

- a) Proporcione a la parte recurrente el nombre del puesto, nivel, cargo, sueldo, así como la dirección que se encuentran adscritas las servidoras públicas Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno Moreno.

Ahora bien, toda vez que la modalidad elegida por la persona recurrente fue en medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento a esta resolución mediante dicha modalidad.

Lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de la persona recurrente a través del medio señalado en el recurso de revisión para efecto de recibir notificaciones.

Finalmente, el sujeto obligado contará con un plazo máximo de **diez días hábiles**, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya notificado, de conformidad con el artículo 157 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo, en un término no mayor a los tres días después de transcurrido dicho plazo para su cumplimiento, lo informe a este Instituto de conformidad al último párrafo del artículo 159 del citado ordenamiento legal.

TERCERO. En caso de incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto procederá de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto de

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la República

Folio de la solicitud: 330024624001568

Comisionada Ponente y encargada del engrose: Josefina Román Vergara

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, conforme a lo previsto en los artículos 159, 169, 170 y 171 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expida certificación de la presente resolución, para proceder a su ejecución.

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en la dirección señalada para tales efectos y, por la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado, con fundamento en los artículos 149, fracción II y 159 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEPTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el número telefónico 800 TEL INAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mx, para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento a la presente resolución.

Así lo resolvieron por mayoría, y firman, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá Méndez, Josefina Román Vergara, con voto disidente, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Norma Julieta Del Río Venegas, con voto disidente, siendo ponente la segunda de los mencionados, en sesión celebrada el once de septiembre de dos mil veinticuatro, ante Ana Yadira Alarcón Márquez, Secretaria Técnica del Pleno.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Expediente: RRA 9880/24

Sujeto obligado: Fiscalía General de la
República

Folio de la solicitud: 330024624001568

**Comisionada Ponente y encargada del
engrose:** Josefina Román Vergara

**Adrián Alcalá
Méndez**

Comisionado Presidente

**Norma Julieta Del Río
Venegas**
Comisionada

**Blanca Lilia Ibarra
Cadena**
Comisionada

**Josefina Román
Vergara**
Comisionada

**Ana Yadira Alarcón
Márquez**

Secretaria Técnica del Pleno

Esta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión **RRA 9880/24**, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, **el once de septiembre de dos mil veinticuatro**.

